

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

S.J.: 110/2024

Se ha recibido en este Servicio Jurídico expediente de primera modificación del contrato de servicios denominado: “GRABACIÓN DE DATOS Y MANIPULACIÓN Y ENSOBRADO DE DOCUMENTOS PARA SU NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, suscrito con a SPEZIAL OUTSOURCING, S.L.

A la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, se emite el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El 31 de marzo de 2023 se formalizó el contrato arriba referido, adjudicado mediante Orden nº 688/2023, de 16 de marzo, a la empresa SPEZIAL OUTSOURCING, S.L., con NIF B16864837, por un importe de 206.426,00 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de dos años que finaliza el 31 de julio de 2024.

Segundo. -Con fecha 10 de abril de 2024, el Director General del Mayor y la Dependencia suscribe una memoria -propuesta para la modificación del contrato, al haberse constatado en 2023 un incremento gradual en el número de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, de revisión del grado y de revisión de los PIA respecto del 2022, lo que se traduce en un porcentaje de incremento en las

grabaciones del 18,74%, lo que unido a la tendencia al alza en la presentación de solicitudes en este año 2024, alcanzaría un 20%.

Tercero. – El 19 de febrero se notifica al contratista la propuesta de modificación, evacuando el correspondiente trámite de audiencia, sin que hasta la fecha haya manifestado oposición.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. - El párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, remite a la normativa anterior para regular las modificaciones de los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Así dice: “2. *Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.*” La disposición transitoria primera no especifica el régimen del contrato tras la adjudicación, pero se sobreentiende que, si es adjudicado bajo la nueva Ley, los efectos, cumplimiento, modificaciones y extinción serán conforme a ésta.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, entró en vigor el 9 de marzo de 2018, y el presente contrato fue formalizado el 31 de diciembre de 2021.

La normativa aplicable viene constituida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, se aplicará, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la legislación anterior de contratación

pública, así como el Reglamento General de contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

La vigente LCSP/17 señala en cuanto a la vinculación contractual (artículo 189) que los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas en favor de las Administraciones Públicas, entre las que se encuentra -como ya hemos dicho- la de modificación.

Este *ius variandi* está sujeto no sólo a unos trámites procedimentales, sino, además, al cumplimiento de los requisitos y condiciones debidamente justificados de conformidad con la legislación vigente en cada momento. Así, la facultad de modificación de los contratos ha sido objeto de una especial atención en el derecho comunitario de contratos, sobre todo desde la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 *Succhi di Frutta* (C496/99). Al respecto, la jurisprudencia europea considera que un abuso de las modificaciones contractuales afecta negativamente a los principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia, obstaculizando el desarrollo de una competencia efectiva. En este sentido la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de enero de 2013 (T- 235/11).

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, contempla la posibilidad de modificar los contratos en el artículo 203, como una de las prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa:

“...los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207”.

“2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63”.

Por su parte, los artículos 204, 191, 153, 207, 63 establecen los requisitos a que está sujeta la modificación de los contratos, de manera que:

- Sólo podrán introducirse modificaciones por razones de interés público.
- Deben estar previstos en los pliegos o en el anuncio de licitación, no sólo la posibilidad de modificación del contrato, sino, también, los supuestos en que podrá modificarse. En otro caso, sólo cabrá la modificación en las circunstancias y con los límites establecidos en el artículo 205.
- También deben detallarse las condiciones, alcance y límites de la misma, el porcentaje del precio al que puede afectar, que no podrá afectar a más de un 20%, y el procedimiento a seguir.
- La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

- Deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 191, 153, 207 y 63 de la LCSP.

Por lo que respecta al procedimiento, el artículo 207 remite a la forma que se hubiese especificado en los pliegos, si bien, conforme al 191, resulta preceptiva la audiencia al contratista.

Segunda. - En el caso sometido a informe, el pliego de cláusulas administrativas particulares, en adelante PCAP, recoge la posibilidad de modificar el contrato en su cláusula 1.22, donde se recogen las posibles modificaciones y los supuestos. El presente supuesto parece encuadrarse al previsto en pliegos.

La citada cláusula 1.22 establece:

“MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: SÍ.

El contrato podrá modificarse una vez perfeccionado, además de por las causas establecidas en el art. 205 de la LCSP, por la siguiente:

22.1.- CONDICIONES EN QUE PODRÁN EFECTUARSE:

Cuando el órgano de contratación constate que las necesidades que va a tener la Administración en términos anuales para la grabación y, en consecuencia, el ensobrado, se han incrementado por encima de los parámetros anuales marcados en la cláusula 2.2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas.

22.2.- ALCANCE, LÍMITES Y NATURALEZA DE LAS MODIFICACIONES:

La modificación afectará al precio del contrato. No obstante, no influirá en el resto de características del servicio, que continuará prestándose en idénticas condiciones a las descritas en los pliegos. La modificación del contrato implicará el incremento de los parámetros mensuales y anuales recogidos en la cláusula 2.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en un porcentaje único para todos los conceptos.

- El precio del contrato se incrementará en consecuencia en el mismo porcentaje en que se haya determinado la necesidad de incrementar los parámetros de ejecución del contrato.

22.3.- PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN AFECTAR:

Al amparo de lo dispuesto en el art. 204.1 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.”

Tal y como resulta de la memoria justificativa, suscrita 10 de abril de 2024 por el Director General del Mayor y la Dependencia, la modificación consiste incrementar los parámetros de ejecución del contrato en un 20%, por lo que los datos máximos de grabación serían:

Los parámetros de la ejecución de la cláusula 2.2.2 del PPT, tras el 20% de incremento serían:

“GRABACIÓN

Nº MÁXIMO MENSUAL- 9.600

TOPE MENSUAL 11.040

MÁXIMO ANUAL 129.600

ENSOBRADO

Nº MÁXIMO MENSUAL 24.000

TOPE MENSUAL 27.600

MÁXIMO ANUAL 316.800”

Por otro lado, de conformidad con la cláusula 3 del PPT, el contratista debe adecuar sus medios personales para llevar a cabo el servicio descrito en los pliegos en las condiciones establecidas. Teniendo en cuenta los nuevos

parámetros de ejecución del contrato tras la modificación, el órgano de contratación entiende que la obligación de adecuación a los nuevos parámetros exigidos, estaría atendida con la incorporación de un administrativo al equipo, justificando económicamente en memoria-propuesta los costes de personal.

Además, desde el punto de vista de su repercusión económica, la modificación prevista es de 5.160,65 euros (IVA 21% incluido), por lo que no alcanza el 20 por ciento del precio del contrato, límite fijado en el artículo 204.1 de la LCSP.

También se ha tenido en cuenta en la presente modificación la necesidad de ampliar la garantía definitiva constituida de conformidad con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 109.3 de la mencionada Ley de Contratos del Sector Público.

No se observa que la modificación proyectada desatienda el régimen jurídico contenido en la LCSP.

En cuanto al procedimiento, siendo aplicable la LCSP, nos remitimos a los arts. 191, 153, 206, 207 y 63 de la LCSP.

Hay que señalar que se ha dado audiencia al contratista, quien no ha manifestado oposición a la modificación proyectada. Si bien, debe advertirse, que la fecha de efectos de la modificación proyectada ha sido, entre tanto, modificada a 1 de junio de 2024, debido a la ausencia de crédito disponible, tal y como indica el órgano promotor en la memoria justificativa, por lo que una vez solucionada la incidencia, debiera comunicarse la nueva fecha al contratista.

Por lo expuesto procede formular la siguiente


CONCLUSIÓN

Examinado el expediente de modificación del contrato de servicios denominado “GRABACIÓN DE DATOS Y MANIPULACIÓN Y ENSOBRADO DE DOCUMENTOS PARA SU NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, suscrito con a SPEZIAL OUTSOURCING, S.L. se emite informe favorable al mismo, sin perjuicio de las observaciones realizadas.

Es cuanto tiene el honor de informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho.

Madrid, a fecha de firma

LA LETRADA- JEFE ADJUNTA DEL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.

Documento firmado digitalmente por: AGUIRRE PELLIN MARTA
Fecha: 2024.04.25 13:50
Verificación y validez por: 
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Marta Aguirre Pellín

-DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

-ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.